

Bolivia y la nueva geopolítica del narcotráfico en sudamérica

Boris Miranda
MARZO 2015

- La reconfiguración de la geopolítica de las drogas en América del Sur es un fenómeno que tiene a Bolivia como uno de sus epicentros con mayor potencial de conflicto. La crisis continental de las políticas de drogas, la incapacidad penitenciaria, el paso de los grandes cárteles por el de las organizaciones delictivas especializadas y el fracaso del paradigma de la criminalización han reinventado un panorama cada año más preocupante para la región.
- Estos componentes se combinan con la generación de nuevos circuitos de comercio “sur-sur” y la aparición masiva de consumidores no tradicionales en América Latina, fundamentalmente gracias al buen momento económico que atraviesan varios países de la zona. Es por ello que desde varias latitudes se ha planteado la necesidad de la construcción de nuevas tesis sobre geopolítica y políticas públicas de drogas con un enfoque que supere el viejo modelo basado en el supuesto del sur productor, el norte consumidor y el horizonte de criminalización que se ha mantenido hasta ahora.
- El ensayo planteará la necesidad de avanzar en un nuevo enfoque de análisis del fenómeno del narcotráfico que analice las dinámicas del sur hacia el sur con el fin de buscar diagnósticos más próximos a la realidad y soluciones adecuadas y viables en nuestras realidades.
- La propuesta metodológica del presente trabajo consiste en partir de las transformaciones advertidas en América del Sur desde las consecuencias que éstas reproducen en Bolivia. Esto significa que, después de un breve repaso de los circuitos del tráfico de drogas y otras economías perversas en el subcontinente, se trazará un desglose de las características de espacios nuevos y tradicionales donde el narcotráfico tiene influencia en Bolivia. Para una correcta delimitación del objeto de estudio, el trabajo se concentrará con mayor énfasis en los circuitos de Sudamérica. Cuando sea necesario, se hará menciones a otras regiones, pero sólo para cuestiones complementarias.



Contenido

1. Planteamiento inicial (a modo de justificación).....	3
2. Antecedentes (el norte y el sur)	4
3. Los nuevos circuitos (sur-sur).....	6
4. El factor Brasil (la frontera más larga y los jóvenes)	9
5. Más historias de frontera (las mujeres)	12
6. Indígenas y campesinos (y los narcopueblos)	14
7. Políticas públicas del sur para el sur (a modo de conclusión).....	15



1. Planteamiento inicial (a modo de justificación)

La reconfiguración de la geopolítica de las drogas en América del Sur es un fenómeno que tiene a Bolivia como uno de sus epicentros con mayor potencial de conflicto. La crisis continental de las políticas de drogas, la incapacidad penitenciaria, el paso de los grandes cárteles por el de las organizaciones delictivas especializadas y el fracaso del paradigma de la criminalización han reinventado un panorama cada año más preocupante para la región.

Estos componentes se combinan con la generación de nuevos circuitos de comercio “sur-sur” y la aparición masiva de consumidores no tradicionales en América Latina, fundamentalmente gracias al buen momento económico que atraviesan varios países de la zona. Es por ello que desde varias latitudes se ha planteado la necesidad de la construcción de nuevas tesis sobre geopolítica y políticas públicas de drogas con un enfoque que supere el viejo modelo basado en el supuesto del sur productor, el norte consumidor y el horizonte de criminalización que se ha mantenido hasta ahora.

Se propone, a partir del desarrollo de este ensayo, que Bolivia y otros países deben comenzar a trabajar una agenda mínima de nuevas políticas públicas que hace énfasis en la descriminalización de la problemática en general y en la protección de poblaciones vulnerables en particular. Nos referimos a mujeres, poblaciones indígenas, sociedades rurales, organizaciones sociales, migrantes y menores de edad, entre otros. Sin olvidar, por supuesto, la necesaria incorporación de la variable ambiental en las decisiones que se tomarán en adelante. Todo el ejercicio académico e investigativo que viene a continuación intenta demostrar cómo la nueva geopolítica de las drogas en América del Sur se ha ensañado con los grupos más indefensos de la sociedad y tiende a agravar los problemas ambientales de la región. Como alternativa frente a todo lo que se ha identificado es que se propone el “enfoque sur-sur” como horizonte de nuestras futuras políticas públicas.

Se intentará realizar un diagnóstico sobre la reconfiguración de los patrones de conducta, alcances y, sobre todo, consecuencias sociales

del nuevo narcotráfico en América Latina con énfasis en Bolivia. Se plantea que las dinámicas nuevas (segmentación, terciarización, tecnología, consumidores recientes, mercados abiertos, etc.) han transformado no sólo los mecanismos de producción/distribución, sino que se ha afectado a una cantidad importante de espacios —vinculados tradicionalmente y otrora inconexos— dentro de los países latinoamericanos. Nos referimos a sociedades rurales, comunidades indígenas, derechos de las mujeres, minería y maderería, áreas protegidas, agendas partidarias y mediáticas, políticas públicas y relaciones entre países.

El ensayo planteará la necesidad de avanzar en un nuevo enfoque de análisis del fenómeno del narcotráfico que analice las dinámicas del sur hacia el sur con el fin de buscar diagnósticos más próximos a la realidad y soluciones adecuadas y viables en nuestras realidades.

La propuesta metodológica del presente trabajo consiste en partir de las transformaciones advertidas en América del Sur desde las consecuencias que éstas reproducen en Bolivia. Esto significa que, después de un breve repaso de los circuitos del tráfico de drogas y otras economías perversas¹ en el subcontinente, se trazará un desglose de las características de espacios nuevos y tradicionales donde el narcotráfico tiene influencia en Bolivia. Para una correcta delimitación del objeto de estudio, el trabajo se concentrará con mayor énfasis en los circuitos de Sudamérica.

Cuando sea necesario, se hará menciones a otras regiones, pero sólo para cuestiones complementarias.

1 Se entiende por economías perversas a las que se generan a partir de la trata de personas, tráfico de armas, compra y venta de drogas, sicariato y comercialización ilegal de recursos naturales, entre otras.



2. Antecedentes (el norte y el sur)

La urgencia de respuestas pensadas y orientadas desde el sur no sólo es una reacción natural ante el largo fracaso del paradigma de guerra contra las drogas que se impuso desde Estados Unidos durante buena parte del siglo XX y que sobrevive en los marcos normativos latinoamericanos hasta hoy. También es una urgencia debido al reconocimiento de las nuevas características del tráfico de drogas en el subcontinente.

Si bien el tráfico y microtráfico de sustancias controladas existe en los países de Norteamérica y Sudamérica hace más de seis décadas, se han registrado transformaciones importantes en los métodos y circuitos que no han ido de la mano con la actualización de los métodos de combatir el mismo².

Como explica Ernesto Samper, expresidente colombiano y actual titular de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), “cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas ‘un asunto de seguridad nacional’ para Estados Unidos, este dejó de ser un problema social y se convirtió en un problema político. La zona andina de América del Sur se convirtió en el principal objetivo geográfico de la lucha antinarcóticos y unos años más tarde se transformó en la lucha antiterrorista, de la misma forma que en los años 50 lo había sido la lucha anticomunista”³.

“La agenda internacional norteamericana —sigue Samper— se concentró en combatir el narcotráfico, tarea que incluía la destrucción de activos ilícitos y laboratorios clandestinos, la interdicción aérea y marítima de los cargamentos de drogas, la captura y la extradición de narcotraficantes, y la vigilancia del lavado de activos. La reducción de las relaciones bilaterales a estos temas suscitó fuertes tensiones sociales y conflictos políticos, particularmente en los países andinos, que afectaron el curso normal de su desarrollo económico y el funcionamiento de sus sistemas democráticos, y recrearon la vieja imagen

hegemónica de Estados Unidos en el hemisferio”⁴.

En el caso de Bolivia, este fenómeno llegó a su punto de consolidación a partir de la promulgación de la Ley 1008 de “Régimen de coca y sustancias controladas”⁵. Este instrumento legal, de 149 artículos, se enmarca en el bloque normativo que se instaló durante las décadas del 70 y 80 en los países latinoamericanos con fuerte apoyo, presión y tutelaje de Estados Unidos. De hecho, en su momento, altas autoridades del gobierno boliviano de aquel entonces reconocieron haber comprometido la aprobación de la 1008 al procurador general de Estados Unidos, Edwin Meese⁶.

En el ensayo Bolivia: consecuencias claras⁷, la investigadora Kathryn Ledebur reseña que “la falta de mecanismos efectivos de fiscalización en el sistema político boliviano agravó el problema y permitió a Estados Unidos negociar con un puñado de funcionarios de alto nivel, minimizando tanto el debate público como la acción legislativa independiente sobre políticas para el control de drogas. (...) En algunos casos, el gobierno boliviano tomó ciertas medidas principalmente bajo presión de Estados Unidos. La promulgación de la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas, o Ley 1008, es un claro ejemplo. Funcionarios del gobierno estadounidense en La Paz presionaron fuertemente para su aprobación. Expertos legales estadounidenses supuestamente ayudaron a redactar la propuesta de ley, que fue aprobada por el Congreso boliviano en julio de 1988”.

La Ley 1008, vigente en Bolivia hasta ahora, delimitó las zonas de cultivo de coca entre “tradicionales”, “en transición” y “no tradicionales”, y sancionó la apertura de nuevas áreas de cultivo. La normativa adoptó las listas de estupefacientes y psicotrópicos de las “Convenciones de Estupefacientes de 1961” y del “Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas” con inclusión de todas las modificaciones introducidas

2 Ver: ESCOHOTADO, Antonio. Historia elemental de las drogas. Anagrama. 1996. (p. 108).

3 SAMPER, Ernesto. Drogas. Prohibición o legalización: una nueva propuesta. Debate. 2013. (p. 23).

4 Ibid.

5 Promulgada el 19 de julio de 1988 por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.

6 YOUNGERS, Coletta y ROSIN, Eileen (coed). Drogas y democracia en América Latina: El impacto de la política de Estados Unidos. WOLA. 2005. (p. 196).

7 Ibid. P. 19



por la Comisión de Estupefacientes en vigor desde el 19 de septiembre de 1987 en las que se reconoce a la coca como una “sustancia controlada”.

Desde 1988 hasta la fecha, activistas de derechos humanos e investigadores han calificado a la Ley 1008 de inconstitucional y de atentatoria contra las garantías de los ciudadanos bolivianos. Sin embargo, la complejidad del tema y la falta de voluntad política han hecho que este instrumento no sea reemplazado aún por ninguna otra norma⁸. Uno de los puntos críticos más cuestionados en estas décadas es la forma en que la ley no hace mayores diferenciaciones entre los “obreros” del narcotráfico y los grandes capos del negocio, permitiendo que los primeros sean juzgados y tratados de igual o peor manera que los segundos⁹.

Además, como explica Ledebur¹⁰, “esta severa legislación antidrogas proporcionaba la base legal para los programas de interdicción y erradicación financiados por Estados Unidos”. La Ley 1008 permitió que Washington comience a financiar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), creada en 1987 vía decreto supremo. En el país norteamericano se desarrollaron los programas de entrenamiento para la naciente policía antidroga boliviana, además que se otorgó equipamiento a través de convenios y se permitió la aplicación de bonos salariales especiales.

La infraestructura, la instalación y equipamiento de las bases también contó con el apoyo de Estados Unidos durante al menos 25 años. Así fue como nació la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), una división de la FELCN que trabajó en zonas como el Chapare y fue reconocida por la agresividad de sus prácticas cotidianas. En un primer momento, el presupuesto de Umopar era controlado o gestionado desde la Oficina de Asuntos de Narcóticos (NAS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos. Además, las tareas de interdicción durante

la década del 90 eran planificadas desde la Drug Enforcement Administration (DEA).

El resultado en materia de violaciones de derechos humanos fue de 57 cocaleros muertos y más de 500 heridos de bala sólo en el Chapare entre 1988 y 2002¹¹. Se consideraron “incontables” los casos de represión violenta en ese periodo, al igual que la cantidad de cocaleros que sufrieron golpes y vejaciones en el trópico de Cochabamba. Se trata del periodo en el que mayor tutelaje y capacidad de presión ejerció Estados Unidos sobre Bolivia en cuando a políticas y acciones antidroga. Los cocaleros señalaron en ese momento que sus derechos humanos se violaban todos los días.

En los hechos, toda la estructura antidroga que operaba en Bolivia se encontraba bajo el control directo o indirecto de Washington, al igual que las políticas públicas sobre las que funcionaban las fuerzas antidroga creadas en ese periodo.

Similares situaciones a la del Chapare (y en menor medida Los Yungas de La Paz) se vivieron en el Putumayo, Colombia, y en Huallaga, Perú, siempre con presencia estadounidense en operativos y planificación.

Samper, ante la nueva política de “seguridad preventiva” inaugurada por Estados Unidos en el gobierno de George W. Bush señala que “la situación podría volverse crítica en algunas regiones como en el área andina. Se trataría de un paso más en el camino de atizar la violencia en el hemisferio —América Latina tiene los índices de homicidio más altos en el mundo—, parecido al que se vivió hace varias décadas cuando se trasladaron a la guerra antidroga estrategias que se inspiraron en la Guerra Fría. Entonces, en aras de la denominada política de seguridad nacional y a nombre de la lucha anticomunista, se legitimaron grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, cónclaves reaccionarios, regímenes corruptos o dictaduras militares. Para acabar con el narcoterrorismo, es posible prever ahora que el Comando Sur de Estados Unidos, tan activo en el desarrollo de la cruzada militar anticomunista, presione por un

8 La Ley 1008 fue ajustada en 2001, sin embargo el espíritu de la norma quedó intacto, así como sus disposiciones más duras en cuanto a criminalización.

9 TNI. Leyes de drogas y cárceles en Bolivia. <http://www.druglawreform.info/es/publicaciones/sistemas-sobrecargados/item/934-leyes-de-drogas-y-carceles-en-bolivia>

10 Op. Cit.

11 La Prensa, 22 de enero de 2002. La Paz. Datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.



mayor involucramiento de los ejércitos del área en la lucha contra el terrorismo, asociado ahora con el combate al narcotráfico. Se reproduciría así una historia que empezó en México, Colombia, Perú y Bolivia”¹².

Todo ello, lo que sucedió y también lo que puede suceder, se da siempre bajo el enfoque norte-sur, donde el primero es el consumidor y la víctima y, el segundo hace de productor y, por consecuencia, es reconocido como el victimario y delincuente. Estados Unidos, todavía el principal consumidor de cocaína en el mundo en términos cuantitativos¹³, instaló ese modelo durante décadas. Ellos diseñan las estrategias regionales, promueven los “planes especiales”, se encargan de capacitar, equipar y pagar a las policías antidroga y certifican los objetivos

cumplidos de los países del vecindario¹⁴. Con sus particularidades, más o menos así se combate al narcotráfico en Sudamérica. Bajo los lineamientos del norte hacia el sur. Lamentablemente, hasta hoy los esfuerzos desde nuestros países por desmontar esto han sido, en el mejor de los casos, insuficientes.

3. Los nuevos circuitos (sur-sur)

Una pista de tierra de no más de 100 metros de largo y cinco de ancho es montada por pobladores campesinos dentro del Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (VRAEM) en el Perú para que pilotos bolivianos aterricen en ella y, apenas seis minutos después¹⁵, partan con más de 300 kilos de pasta base de cocaína rumbo a las llanuras de

Beni y Santa Cruz. Allá, en los laboratorios donde se cristaliza la pasta para convertirse en clorhidrato, los esperarán los cocineros colombianos que tienen conexiones con los “comandos” y clanes de Brasil y Paraguay que esperan la mercancía procesada. Si un emisario mexicano aparece por la fábrica seguro será por una visita de inspección para comprobar la calidad de la producción. Es casi imposible que un “pez gordo” aparezca por las cocinas.

En el camino hasta las selvas se tendrán que sortear varios controles, en especial de fuerzas policiales. Allí es donde se “invierte” en sobornos y se recluta a los uniformados para que sean parte del negocio. Si un militar o un oficial de Policía ingresan en “la planilla” serán de gran ayuda para burlar controles y también para obtener armamento y municiones. Ese es otro de los segmentos del negocio que más cotiza y que tiene una red de operadores que llega hasta México y Estados Unidos. En Bolivia, el dinero del narco ha llegado a niveles jerárquicos de la Policía¹⁶, pero se sabe que son los mandos medios los principales aliados del negocio¹⁷.

Las poblaciones aledañas pasarán a convertirse en proveedores de bienes y servicios para los narcos. Pueden ser almuerzos, gasolina, diesel o labores domésticas y de seguridad. El dinero de la droga revoluciona por completo la forma de vida de estas localidades. Algunas de estas ciudades intermedias, en especial las cercanas al Chapare, fueron elegidas por los mexicanos como su centro de operaciones, de acuerdo a los últimos reportes de prensa boliviana¹⁸. La nota añade que dos personas ya fueron asesinadas en los últimos meses por ajustes de cuentas relacionados con las bandas mexicanas.

12 Op. Cit. P. 150.

13 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Word Drug Report (inglés). <http://www.unodc.org/wdr2014/> Se calcula que EEUU tenía 5,3 millones de consumidores de cocaína y sus derivados, como el “crack” o “piedra”, en el 2008, todos ellos de 12 o más años. Dicha cifra representa aproximadamente el 2,1% de la población

14 Si bien organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas también son parte activa de muchos de estos procesos, el delineado geopolítico regional de la lucha contra las drogas fue concebido en Estados Unidos. Es más, en décadas pasadas plataformas multilaterales como la OEA, entre otras, también se plegaron con entusiasmo al consenso de Washington.

15 Ver: <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/narcovuelos-peru-6-minutos-abastecerse-cocaina>

16 Ver: “René Sanabria, de prestigiosos general a presunto capo de la droga”. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/02/110228_bolivia_narcotrafico_rene_sanabria_perfil_az.shtml

17 Ver caso Navia: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20110228/gobierno-busca-nexos-entre-sanabria-y-el-subteniente-rene_115047_228051.html

18 Ver la nota publicada en La Prensa de La Paz “Al menos dos cárteles mexicanos operan en Bolivia”: http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/seguridad/20141124/al-menos-2-carteles-de-mexicanos-operan-en-bolivia_62609_103666.html



En las urbes cercanas a las fronteras compartidas entre Brasil, Perú y Bolivia se utilizan a pandillas de adolescentes como sicarios baratos. Ellos mismos, además, se encargarán de convencer y reclutar a niñas y adolescentes con fines de trata y tráfico. Con el tiempo las entrenarán en el oficio de mulas o tragonas. Las economías perversas de la violencia sexual comercial, la trata y la droga están articuladas. Comparten métodos, operadores y centros de acción. En el norte amazónico boliviano, estos actores se aprovechan de las familias en situación de ruptura o niños en situación de abandono para el “reclutamiento”. Las pandillas se vuelven las nuevas familias de niñas y adolescentes y de a poco las inducen en el negocio de la prostitución y el microtráfico. Todo es posible gracias a que se ha compartimentado la infraestructura de estos ilícitos. Los operadores le ofrecen el “servicio” tanto a tratantes como a narcos¹⁹.

En el sur de Bolivia, el tráfico de pasta y clorhidrato apunta al mercado argentino. Pobladores de El Alto y residentes peruanos tienen instalados microlaboratorios domésticos en varias zonas de esa ciudad. Ellos también reciben la pasta base de cocaína que se produce en el VRAEM. Vehículos recogen la mercancía en las madrugadas y emprenden el viaje. Otros pasos frecuentes de ingreso son el Desaguadero y el lago Titicaca²⁰. Después aprovecharán los puntos fronterizos que unen a Bolivia con Brasil, Argentina, Chile y Paraguay para pasar la mercancía. Desde allí el producto puede llegar a Buenos Aires o pegar el gran salto hasta los mercados europeos y asiáticos. La droga puede ingresar a la Argentina por tierra, en un vuelo comercial o a través de botes por el río Bermejo, al sur de Tarija.

Un kilo de clorhidrato con 90% de pureza que cuesta entre 1.800 y 2.000 dólares en Perú y Bolivia, se valoriza hasta 3.000 en suelo colombiano. En Buenos Aires y Sao Paulo costará 8.000 dólares,

mientras que en Miami llega a los 25.000. Si el producto cruza el Pacífico o el Atlántico, el valor se elevará a 35.000 dólares en Madrid, 80.000 en Moscú y hasta 100.000 en Tokio²¹.

“No existe ningún mercado en el mundo que sea tan productivo y tan rápido como el de la cocaína. No existe una inversión financiera en el mundo más jugosa que la cocaína. Ni siquiera las cifras récord que han alcanzado las acciones bursátiles se pueden comparar con los intereses que da la cocaína”, escribe el investigador Roberto Saviano en su más reciente libro *CeroCeroCero*²². Seguro que el intrépido periodista italiano reafirmaría con mucha mayor convicción esta sentencia si conociera los ridículos pagos (en comparación con las ganancias) que reciben los mochileros o acopiadores de hoja del VRAEM que permiten que todo el negocio se ponga en marcha. Son conocidos los casos de incredulidad y asombro cada vez que alguno de los habitantes de las selvas peruanas conoce las cifras del negocio del que son uno de los primeros eslabones²³.

De acuerdo a Ricardo Soberón, exzar antidroga de Perú e investigador del tema, “de distinto modo, los países de América Latina se encuentran cada vez más comprometidos en la geopolítica del narcotráfico. Sea por la violencia descontrolada que ocasionan los intentos de control fundados en una represión indiscriminada o sea por la profusión de casos de corrupción institucional relacionados a la política o el ejercicio del poder. O tal vez sea por la simple ineficiencia de las agencias encargadas de atacar el crimen organizado, los patrimonios ilícitos o las redes que abastecen a los traficantes de insumos químicos o armas, en la segunda década del siglo 21 vislumbramos una mayor presencia del narcotráfico en la vida de los latinoamericanos”²⁴.

19 Ver el reportaje “El escape del infierno”. MIRANDA, Boris. El Desacuerdo #12. Noviembre de 2013. <http://eldesacuerdo.com/?El-escape-del-Infierno-parte-I>

20 Ver el reportaje “La cocaína entra por el Titicaca, lo saben pobladores y autoridades”. El Deber. <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/cocaina-entra-titicaca-pobladores-y.html>

21 El precio por gramo al consumidor final, con datos del World Drug Report, puede consultarse en el siguiente enlace: <http://t.co/dLFYDdxvgy>

22 SAVIANO, Roberto. *CeroCeroCero: Cómo la cocaína gobierna el mundo*. Anagrama. 2014.

23 Ver el reportaje de David Beriaín publicado en El País de España titulado “Los obreros de la cocaína”: http://elpais.com/elpais/2014/01/22/eps/1390408071_969586.html

24 SOBERÓN Ricardo. “Tendencias y paradojas del



El experto detalla que “ahora, los traficantes dedican mayores esfuerzos a actividades que les permiten aprovechar los difíciles caminos y rutas que conectan la oferta y la demanda de drogas, armas, personas y capitales. Ante esto, las Policías han tenido que aumentar su trabajo para impedir estas ilícitas expresiones del comercio internacional. Es, por decir lo menos, un contrasentido que esto coincida con las economías modernas del siglo 21, que multiplican los tratados de libre comercio y rompen las barreras arancelarias. Muchas veces las redes de traficantes de drogas o de productos ilícitos se ven beneficiadas por los instrumentos y mecanismos que liberalizan el comercio de bienes y servicios. Ésta es otra de las paradojas visibles en la guerra contra las drogas que se libra en todo el hemisferio occidental conducida por los estrategas del Pentágono y del Comando Sur, con la complicidad de la Junta Interamericana de Defensa y la antigua Escuela de las Américas, hoy denominada Western Hemisphere Institute for Security Cooperation”.

Familias peruanas prefieren completar la cristalización de la cocaína en Bolivia porque los precursores necesarios para este procedimiento son menos controlados de estelado de la frontera. Bandas de peso del Brasil como el Comando Vermelho o el Primer Comando Capital tienen instalaciones en las llanuras de Beni y Santa Cruz para ponerse “a buen recaudo” porque la brutal guerra de la Policía contra estos grupos en Sao Paulo y Rio de Janeiro los obliga a buscar nuevos centros de operaciones. Similar situación sucede con los cárteles mexicanos, que primero ²⁵comenzaron “mexicanizando” Centroamérica y ahora tienen presencia cada vez más fuerte en América del Sur. Como apunta Soberón, la apertura fronteriza ha sido muy bien aprovechada por el crimen organizado proveniente de los países vecinos de Bolivia.

El periodista y director del sitio InsightCrime en español Jeremy McDermott explica este fenómeno como el “efecto cucaracha”²⁶. “Con la evolución del

crimen organizado transnacional latinoamericano se han producido acontecimientos que ahora afectan a Bolivia de forma directa. A pesar de que los colombianos han estado interesados en Bolivia durante unas cuatro décadas, la naturaleza de este interés ha cambiado en los últimos diez años. En Bolivia, utilizando (pasta) base peruana, los colombianos pueden producir un kilo de cocaína de alta calidad por menos de US\$2.000. Ese mismo kilo en São Paulo o Buenos Aires alcanza un valor de hasta US\$8.000.

Por lo tanto, los colombianos pueden ganar más de US\$5.000 por kilo, pero con un riesgo mínimo de interdicción y casi ninguno de extradición; simplemente moviendo envíos de drogas a través de la frontera con Bolivia hacia Brasil o Argentina. Estos dos países también actúan como puntos de transbordo para los mercados más lucrativos de todos: Europa y Asia. Y es aquí donde los colombianos están concentrando sus esfuerzos”.

El autor añade que desde que los mexicanos se llevan la mayor tajada del mercado estadounidense, los colombianos prestan mucha mayor importancia a Bolivia como punto de partida de los envíos a Europa y Asia.

En la década del 80, las organizaciones criminales de Colombia establecieron conexiones con narcotraficantes bolivianos para que sirvan de proveedores de pasta base. Después, los cárteles se encargarían de la cristalización y posterior envío a los Estados Unidos.

“El llamado ‘efecto cucaracha’ también ha tenido un impacto significativo sobre Bolivia. Cuando las luces se encienden en una habitación, las cucarachas corren hacia los rincones oscuros. El crimen organizado en gran medida actúa de la misma manera. Las luces están encendidas en Colombia y los barones de la droga, una vez son identificados, tienen una vida útil bastante corta allí, por lo que se trasladan al extranjero. Bolivia todavía no ha podido encontrar su interruptor eléctrico”, concluye McDermott.

narcotráfico en América Latina”. <http://www.envio.org.ni/articulo/4773>

25 SAMPER, Ernesto. Op. Cit. P. 89.

26 MCDERMOTT, Jeremy. “Bolivia: el nuevo epicentro del narcotráfico en Suramérica”. <http://es.insightcrime.org/investigaciones/bolivia-nuevo-epicentro-narcotrafico-suramerica>

org/investigaciones/bolivia-nuevo-epicentro-narcotrafico-suramerica



Bajo las nuevas reglas, las bandas del crimen organizado internacional han segmentado y especializado sus “servicios” y actividades. Ya pasó el tiempo en el que Pablo Escobar y el cártel de Medellín recogían la pasta base de Perú y Bolivia y después se encargaban de todos los demás aspectos del negocio: purificación, traslado, seguridad, sobornos, desarrollo de tecnología, distribución, cobros y comercialización. Ahora existen organizaciones dedicadas específicamente a cada engranaje del negocio.

Soberón explica que esto ha generado el ingreso y la cooptación de miles de personas dentro de los rangos más bajos y con menor pago del negocio.

“Gracias a los mayores controles diseñados el narcotráfico ha mutado en sus formas de proceder para poder evadirlos. Y así ha sucedido en todas las fases del proceso: hay mutaciones en la producción, el procesamiento, el transporte, el almacenamiento, los grandes traslados y la distribución final. Hoy en día, las grandes estructuras empresariales de traficantes han permitido la ‘tercerización’ de cada uno de estos eslabones, trasladando a terceros los riesgos mayores en las distintas fases de producción de la cocaína”.

“Si cae un pequeño transportista –sigue Soberón– no tiene por qué hacer caer al empresario encargado de la exportación de la droga. Lo mismo ocurre con miles de mulas, burriers, paqueteros, raspachines, traqueteros, cargachos y un sinnúmero de personas, migrantes, jóvenes, desempleados, que terminan llenando las cárceles latinoamericanas. Se trata de sujetos absolutamente reemplazables en el mercado de lo ilícito. Como afirma Xavier Andrade: ‘La satanización de las drogas en el plano del discurso político y de las relaciones internacionales ha tenido entre sus principales efectos el privilegiar las acciones represivas sobre determinados actores constitutivos del narcotráfico’.²⁷”

El experto peruano añade que este fenómeno ha logrado que la mano de obra barata del narcotráfico se regenere de manera permanente y natural. “Por cada uno que cae en manos de la Policía se encontrarán cuatro o cinco dispuestos a tomar el

relevo para obtener el pequeño beneficio de su participación. Es ésta una paradoja: el narcotráfico es un negocio que expone a miles de actores sociales, pobres y económicamente reemplazables, que llenan las estaciones de Policía, los tribunales, los centros terapéuticos y las cárceles”.

4. El factor Brasil (la frontera más larga y los jóvenes)

La frontera de Bolivia con Brasil es más grande que la de México con Estados Unidos y son los brasileños quienes están cerca de desplazar a los norteamericanos como los principales consumidores de cocaína y sus derivados en el mundo. 3.423 kilómetros de línea divisoria separan a los primeros, mientras que 3.185 dividen a los dos países de Norteamérica.

La segunda edición del Informe Nacional de Alcohol y Drogas, elaborado por la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp) mostró que 5,6 millones de adultos y 442.000 menores de entre 14 y 17 años de edad admitieron haber consumido cocaína en la forma de productos derivados del alcaloide como “crack”, “oxi” o “merla”.

“Nuestro estudio mostró que el país (Brasil) es el segundo mayor mercado de cocaína y sus derivados en el mundo en cuanto al número absoluto de usuarios y que Brasil representa el 20 por ciento del consumo mundial”, explicó el psiquiatra Ronaldo Laranjeira, coordinador del informe. Entre los que admitieron haberla consumido en el último año, 2,6 millones serían adultos y habría 244.000 adolescentes²⁸. Brasil es, además, el principal consumidor de crack del mundo.

El país demanda hoy el 18% de la producción mundial de dicha sustancia. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito²⁹,

28 “Estudio muestra a Brasil como segundo mayor consumidor de cocaína en el mundo”. <http://www.abc.com.py/internacionales/estudio-muestra-a-brasil-como-segundo-mayor-consumidor-de-cocaina-en-el-mundo-447219.html>

29 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Word Drug Report (inglés). <http://www.unodc.org/wdr2014/>

27 Op. Cit.



el 1,75% de la población brasileña (2,8 millones de personas) consumen 92 toneladas anuales de cocaína. Esta explosión de consumo es uno de los perfiles más preocupantes del boom económico experimentado por la nación sudamericana. El uso del estupefaciente alcanza a todos los estratos sociales, expandiéndose rápidamente tanto entre los sectores más vulnerables como en las amplias capas medias, que hoy representan más del 50% del total de la población. Países como Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Venezuela experimentan o experimentaron similares progresos, lo que también produjo incrementos en la demanda interna de cocaína, marihuana y otras drogas sintéticas.

La demanda brasileña ha multiplicado la circulación de pasta base y clorhidrato consolidando un corredor que empieza en Perú, atraviesa por Bolivia y termina en las manos de los comandos brasileños.

El método preferido por los que manejan el negocio son los denominados narcovuelos. Las avionetas peruanas y bolivianas no necesitan más que unos minutos de parada en mitad del VRAEM para cargar centenas de kilos de mercancía. Los narcovuelos son cada vez más frecuentes y prácticamente imposibles de controlar por la falta de radares y tecnología adecuada que detecte el movimiento de las avionetas. A pesar de estos impedimentos, entre enero y noviembre de 2014, la FELCN boliviana logró detener 27 naves que transportaban droga a través del corredor³⁰. El 95% de la pasta base de cocaína que sale del VRAEM pasa por Bolivia³¹.

Según la investigación “Corredores ilícitos entre Bolivia y Perú”, elaborada por Puente, investigación y enlace (PIE), se registran entre tres y cuatro narcovuelos diarios en este circuito³².

Sin embargo, investigaciones periodísticas como la de IDL-Reporteros, consigna entre 5 a 10 y hasta

13 recorridos por día³³. Además de partir de los valles, las aeronaves también despegarían cargadas desde Puno y de Alto Huallaga. El documento de PIE añade en sus conclusiones que todas las poblaciones que ocupan un corredor paralelo a la línea fronteriza son susceptibles a generar una relación con la producción y tránsito de drogas. Estas zonas de bajo desarrollo, tienen limitado acceso a servicios básicos, salud y educación.

Además de actuar como transportadores, según informes recogidos por InsightCrime³⁴, los campesinos que habitan estas selvas han ayudado a reconstruir más de un cuarto de las narcopistas de aterrizaje destruidas en esta región peruana por las autoridades durante los primeros siete meses de 2014. El dinero que ganan por su participación en el comercio de drogas y actividades aledañas es demasiado tentador para ser pasado por alto por los residentes de la zona. Los reportes hablan de que por los lugareños que controlan estas pistas reciben hasta 10.000 dólares por cada narcovuelo exitoso. Un reporte reciente indica que en el VRAEM existen “empresas” dedicadas al mantenimiento y reconstrucción de estas sendas³⁵.

Los pagos del narco, en comparación con los ingresos promedio para pobladores de zonas fronterizas de Perú y Bolivia, invitan a éstos a aventurarse en un circuito en el cual quedan en el último eslabón del negocio. En uno de los puestos más expuestos y peligrosos, además.

En ambos lados de la línea divisoria nunca fue tan fácil ingresar al circuito del narco como “proletario” u “obrero”. Tampoco nunca fue tan difícil para estas poblaciones fronterizas mantenerse al margen del negocio, pues de manera directa o indirecta terminan contratados como proveedores de materias primas, alimentos o como albañiles o ayudantes en tareas domésticas.

30 Ver: <http://www.eldeber.com.bo/bolivia/felcn-secuestro-27-avionetas-ruta.html>

31 Ver: “Bolivia es el destino del 95% de los narcovuelos del país”. El Comercio. Lima. Agosto de 2014. <http://elcomercio.pe/lima/policiales/bolivia-destino-95-narcovuelos-pais-noticia-1748813>

32 “Corredores ilícitos entre Bolivia y Perú: ¿Rutas escondidas o extrañas?”. Puente, investigación y enlace (PIE). Cochabamba. 2014.

33 Ver: “Epidemia de narcovuelos en el VRAE”. MELLA, Romina. IDL-Reporteros. Lima. 2014. <https://idl-reporteros.pe/aeropuerto-jorge-chavez-en-la-selva/>

34 <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/narcovuelos-peru-6-minutos-abastecerse-cocaina>

35 Ver: <http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-policia-derriba-avioneta-boliviana-288-kg-cocaina-el-vraem-545039.aspx>



Esta paradoja es una trampa de dos dimensiones que padecen grupos vulnerables y que no es tomada en cuenta por las políticas públicas ni normativas vigentes sobre el tema. El grupo social con mayor tendencia a incorporarse a estos ejércitos de “obreros” es el de los jóvenes, sin embargo madres solteras (como mulas o tragonas), migrantes o indígenas también están expuestos a esta posibilidad.

Por tierra también hay movimiento. Los mochileros peruanos trasladan pasta y clorhidrato en mochilas a través de la franja fronteriza en el norte, cerca de las poblaciones pandinas de Bolpebra y Soberanía. Abren senda con machete y se guían con GPS para dejar los paquetes con la mercancía (entre 20 y 30 kilos) enterrados en territorio boliviano. Los que manejan estas rutas desde el lado boliviano también se guían con tecnología satelital entre la selva y buscan la señal convenida. Puede ser una bandera o un trapo, hasta una botella vacía o una prenda de vestir. Lo que sea sirve para marcar el lugar donde está la “encomienda”. Desenterrada la mochila, el acarreador la entrega a un motociclista que espera fuera del monte y que se la lleva a Cobija a toda velocidad. Eso significa que coronaron el envío.

Los pagos y tratos por estos envíos menores se hacen en las ciudades y haciendas, a plena luz del día, con la merca a varios kilómetros de distancia y en total impunidad. Todas las líneas con Perú ya tienen dueños y funcionan de manera regular. A pesar de ello, los grupos que operan en la región saben que durante esos traslados existen probabilidades altas de volteo de parte de bandas enemigas y por eso todos andan armados y se crearon pandillas de sicarios con jóvenes bolivianos y peruanos. Casas particulares en la capital pandina son usadas como centros de acopio de la droga.

Allí entran en escena los brasileños, que cruzan el Puente de la Amistad que une a Cobija con Brasileia a diario para hacer sus compras. Los encargos no pueden ser de menos de un kilo. Si se trata de clorhidrato (polvo), el precio medio es de 1.500 dólares hasta 2.000. Después de medir la calidad y pesar el paquetito, la entrega se hace en otro punto de la capital pandina.

Al otro lado de la frontera, los compradores podrán

duplicar o triplicar el peso del producto a través de la especulación en el menudeo y con la mezcla del producto para estirarlo (el famoso “corte”). Así conseguirán hasta 10.000 dólares o más en las calles de Río .

La segmentación del negocio de la droga y el desmontaje paulatino de los grandes cárteles en toda la región ha hecho que cualquier muchacho pueda ingresar en el circuito como mochilero o intermediario minorista en Colombia, México, Perú o Bolivia. El riesgo es elevado y casi siempre los más pobres llevan las de perder. Mientras menos tengas, más bajo será tu nivel en el negocio y consecuentemente más alto será el riesgo al que te expones. Las mulas, mochileros, vendedores al menudeo, distribuidores, cobradores y los sicarios siempre están más expuestos a ser detenidos por la Policía o a que una bala enemiga termine con sus vidas. En cualquiera de los dos casos, los peces gordos no tendrán mucho de qué preocuparse. Por ese flanco, ellos están blindados.

La mano de obra barata abunda y, por lo general, los rangos bajos no saben de quién es la merca que mueven, ni quién controla el mercado al que la revenden. Los jóvenes que entran al monte con sus GPS por lo general son de una organización accesoria o subalterna. En el caso de Cobija incluso pueden ser miembros de un sindicato de mototaxistas que “dobletea” acarreado pasta. No saben ni para quién trabajan y son poco menos que prescindibles. Todo está terciarizado y eso favorece más al mercado y a los capos.

Ricardo Soberón explica que en el futuro este fenómeno se irá acentuando y que las víctimas serán los migrantes. “La permanente fragmentación/segmentación de cada una de las fases del proceso de producción de cocaína es una variable que caracterizará al narcotráfico en los próximos años. Desde el cultivo de plantas prohibidas hasta la exportación de sus productos finales, el proceso no sólo distrae los esfuerzos estatales de interdicción, sino que permite una creciente participación en el circuito ilícito a grupos socialmente vulnerables o que resultan excluidos del modelo económico

36 Ver: MIRANDA, Boris. “Bolivia en la trampa”. El Desacuerdo #18. La Paz. 2014.



global (jóvenes, migrantes, mujeres, provincianos). Es el caso de los miles de migrantes sudamericanos que en su periplo migratorio hacia el Norte desarrollado son objeto de chantaje o amenaza por grupos de traficantes que les exigen el trasiego de pequeñas cantidades de drogas en sus cuerpos. En los próximos años, el tránsito de pequeñas cantidades de drogas resultará el mecanismo más eficaz y menos costoso para el crimen organizado. Empleará ingentes cantidades de “mano de obra” y distraerá los escasos recursos del control estatal”.

5. Más historias de frontera (las mujeres)

La frontera con Brasil también ha generado que el sicariato se instale en las ciudades bolivianas colindantes con la línea divisoria. El crimen organizado no ha necesitado hacer grandes despliegues de recursos humanos como en décadas pasadas o inversiones muy fuertes. Al igual que los cárteles mexicanos con Centroamérica, las pandillas de jóvenes de zonas rurales de Bolivia son cooptadas y convertidas en sicarios baratos que efectúan trabajos por menos de 50 dólares.

Por Guayaramerín y Riberalta, en Beni, se utilizan chicas menores de edad que son víctimas de la trata como mulas. Las pandillas las entrenan con uvas congeladas para que puedan tragar las bolsitas con el polvo. Las reclutan de a poco, primero las suman a pandillas, después las prostituyen y finalmente acaban al servicio de los narcotraficantes viviendo entre lenocinios en ambos lados de la frontera.

Una de las historias obtenidas en el trabajo de campo del reportaje “El escape del infierno”³⁷ es la de Majo (nombre falso), una menor de edad que logró salir de los circuitos de la trata después de haber trabajado en centros de prostitución de Bolivia y Brasil. Al tiempo en la que ella era abusada sexualmente, fue utilizada como mula y también iniciada en el alcohol y la drogadicción.

“Yo era decidida a todo. Me pusieron droga en la mesa y compraron cerveza. Así comencé a drogarme y a los tres días me escapé de mi casa”,

cuenta ella en un reportaje publicado en 2013³⁸. Majo no quería saber nada más de su familia. A los siete la violó uno de sus hermanos, a los 10 el otro y, cuando cumplió 12 años, su padre comenzó a abusar de ella.

Ahora ella cuida a su hijo de casi un año y a otros niños en un centro de rehabilitación en las afueras de Riberalta. Se dedica a cuidar el jardín y a preparar galletas de almendra. A pesar de que lleva casi dos años sin probar drogas, todavía sufre algunos ataques de ansiedad por el síndrome de abstinencia. Fueron dos años de consumo los que ella tuvo que vivir.

“Había hierba (marihuana), nevado (cocaína), la pasta base y cheiro (inhalable como el bazuco, derivado de la pasta base). Con la droga me olvidaba de todo algunas veces y otras me acordaba de todo y comenzaba a golpear las cosas con un cuchillo. Empezaba a llorar y drogarme más. Me puse muy flaca porque ya yo no comía, sólo me drogaba. Consumí toda clase de drogas”, recuerda la chica que ahora tiene 16 de años.

Majo explicó que ella quería venganza. Lo hacía todo como una forma de desquitarse de su padre y sus hermanos. La pandilla que la reclutó y la puso a traficar cocaína llegó a matar a miembros de una banda enemiga mientras ella miraba la escena desde un restaurante. La bebida y las drogas la pusieron en el camino de la prostitución y el microtráfico de drogas. Todo de la mano de sus “amigos” de la pandilla a la que ingresó. De los lenocinios de Riberalta y Guayaramerín pasó a un prostíbulo en Brasil.

“Estuve dos años así, desde los 12 años. Tenía una amiga prostituta, pero no de locales. Un amigo tenía un motel y nos llamaba cuando había clientes. Una brasileña que vendía chicas nos buscó ahí. Así terminé en Brasil. La señora nos pedía cuarenta reales diarios y todo lo demás que ganemos era para nosotros. Volvimos a Riberalta y a Guayaramerín para traer más chicas y apareció la Policía. Nos detuvieron, pero yo me escapé”, cuenta ella.

37 Op. Cit.

38 Ver: MIRANDA, Boris. “El escape del infierno”. El Desacuerdo #12. La Paz. 2013.



Majo también fue parte de la red de tratantes que iniciaba a nuevas menores en el negocio. Por cada chica que llevaba al Brasil le pagaban 100 reales. “A veces las llevábamos con mentiras y las dejábamos ahí. Les decíamos que les iban a pagar por bailar. Cuando llegaban miraban que había hombres, nosotras nos hacíamos a las locas y las dejábamos ahí”.

La joven sabe que dos años son muy poco tiempo y que los narcos que la llevaron a las adicciones y a la prostitución usan la misma carretera cercana a donde vive para hacer sus entregas todas las semanas. Ellos están muy cerca y ella reconoce hasta el ruido de las motos cuando pasan por ahí. Por eso prefiere no salir del refugio donde se encuentra. Ella tuvo suerte, está libre y en camino de la rehabilitación. Muchas de sus amigas no lograron escapar y todavía viven en lenocinios o en una cárcel de mujeres.

En un informe sobre la situación actual de las mujeres y su participación en el mercado ilícito de drogas, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA)³⁹ ha señalado que la mayoría de las mujeres encarceladas en la región están privadas de su libertad por crímenes relacionados con las drogas. De ellas, la mayor proporción está en espera de juicio – presuntas inocentes pero detenidas en “prisión preventiva”.

Entre los hallazgos de esta investigación se encuentra que las mujeres participan, en su mayor parte, en los eslabones más bajos de la cadena delictiva en la comercialización de las drogas. El informe de la CIM/OEA subrayó la necesidad de mayor y mejor información sobre la naturaleza y el alcance de la participación de las mujeres en el mercado ilícito de las drogas.

Alrededor de 625,000 mujeres y niñas están privadas de libertad en el mundo, en espera de una sentencia o cumpliendo una sentencia condenatoria. En los

últimos años, la población carcelaria de mujeres ha crecido a una tasa superior a la de hombres. En América Latina, se ha duplicado en los últimos cinco años, de 40,000 en 2006 a 74,000 en 2010. Los delitos de drogas cometidos por mujeres están, en su mayoría, vinculados con sus condiciones de crisis socio-económica, caracterizada por la pobreza y la coerción. En la gran parte de los casos se reporta poca o nula escolaridad, ausencia de oportunidades en la economía formal y responsabilidad sobre menores como sus propios hijos o los de otros de la misma comunidad.

Un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de la prisión preventiva en América⁴⁰ destaca que, en 2013, del total de 13,654 personas privadas de libertad en Bolivia: 1,724 son mujeres (13%) principalmente por delitos de drogas (48%) y robo (15%). De la población de hombres, 24% está privada de libertad por delitos de drogas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia, informa que en 2012 había 4.317 personas detenidas con delitos relacionados con las drogas, de las cuales 1.009 eran mujeres (23.4%).

El aumento de la población femenina en los centros de reclusión durante los últimos cinco años está vinculado con el desembarco del crimen organizado internacional en las localidades rurales de Bolivia, donde las mujeres son el sector poblacional más vulnerable por sus características socioeconómicas. La trata de personas y la explotación sexual comercial son consideradas economías perversas articuladas al fenómeno del tráfico de drogas y de recursos naturales. Se ha constatado que en puntos, como el norte de La Paz o en las selvas peruanas, donde la actividad del narco y de la explotación ilegal de minerales o madera gana espacio se genera demanda de prostitución. Lo que conlleva a que grupos de tratantes generen circuitos de reclutamiento y traslado para satisfacer ese “requerimiento”.

39 Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA). “Mujeres y drogas en América Latina: Un diagnóstico en construcción”. <http://www.oas.org/en/cim/docs/WomenDrugsAmericas-ES.pdf>

40 “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”. Washington, D.C.: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, 2013, p. 22, <http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfs/Informe-PP-2013-es.pdf>



6. Indígenas y campesinos (y los narcopueblos)

En 2013, el exministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero⁴¹ declaró a la provincia Ichilo como “el epicentro de la producción de cocaína en Bolivia”. El político llegó a agregar que existían “pobladores y dirigentes” que defendían al narcotráfico. Aquella declaración, que puede considerarse como políticamente incorrecta, se hizo días después de que una de las poblaciones de la región, Yapaquí, rechazó la instalación de un cuartel antidroga⁴².

De acuerdo a la autoridad boliviana, en los últimos dos años se hicieron más de 6.000 operativos en la zona. Se incautaron más de 15 toneladas de cocaína y se destruyeron más de 6.100 fábricas móviles de producción de cocaína en la región y más de 39 laboratorios de reciclaje y procesamiento de clorhidrato de cocaína. En el mismo lapso de tiempo se aprehendió a 26 personas, entre ciudadanos bolivianos y colombianos. Durante los operativos fueron detectadas pistas clandestinas, armas, equipos de logística y de comunicaciones, entre otros.

Ichilo es una provincia ubicada en el departamento de Santa Cruz y que se encuentra relativamente cerca del Chapare y de las selvas y parques nacionales donde también ha penetrado el cultivo ilegal de coca. Cuatro poblaciones intermedias están asentadas en esta provincia: Santa Fé de Yapaquí (donde se quiso evitar la instalación del cuartel antidroga), San Germán, Kilómetro 7 y Buena Vista.

En el reportaje “Ichilo, víctima y cómplice del narcotráfico”, la periodista del diario El Deber Nelfi Fernández presenta un testimonio anónimo de un exmat’a (persona que remoja y pica la coca) de la región en la que se relata cómo funciona el narco. “Es un círculo que se extiende y acoraza comprando conciencias. Tiene su propio lenguaje y organización. Nace con los cultivos ilegales de coca.

Los coccaleros venden su producto a las ‘hormigas’ o personas que trasiegan la hoja milenaria. Los mat’as convierten la coca, con la ayuda de precursores químicos, en cocaína y ‘las mulas’ se encargan de hacerla llegar a su destino, dentro o fuera de Bolivia”⁴³.

José Antonio (nombre falso con el que El Deber presenta a su informante) cuenta que tiene un pariente “campana”. Dice que por él sabe que los soplones están en todos lados, en los pueblos, en los puestos de control de la FELCN, merodeando por los alrededores de las bases de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural o de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). La tajada que reciben es de acuerdo con la importancia de la alerta que dan. “Va desde 200 hasta 300 bolivianos. Pero no solo es plata: también reciben motocicletas, vehículos de cuatro ruedas y teléfonos celulares”.

“Si me ayudas honestamente, te quedas con el fierro”, es la promesa con la que caen los novatos. Con esas dádivas el narco ha extendido sus tentáculos. Lo que revela José Antonio tiene relación con lo sucedido con un dirigente de Yapaquí, que después de comprometer una entrevista con el diario que presenta el reportaje dio un paso atrás diciendo que había sido amenazado de muerte.

Un mat’a gana 400 bolivianos por incursión, mientras que un cocinero puede obtener 1.000 bolivianos en un día.

De acuerdo a Ricardo Soberón⁴⁴, el nuevo narcotráfico en América Latina es más complejo de analizar por la forma en la que se ha extendido en las sociedades rurales cooptando a cuanto campesino o indígena puede. El experto añade que a estas alturas ya se vislumbran tendencias que, producto de las economías perversas, pueden afectar el curso de procesos agrarios y también fenómenos ambientales por la colonización indiscriminada y fuera de control.

41 Senador electo por el oficialista Movimiento Al Socialismo por el periodo 2015-2019.

42 <http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/3/31/epi-centro-produccion-cocaina-ichilo-dice-romero-17637.html>

43 FERNÁNDEZ, Nelfi. “Ichilo, víctima y cómplice del narcotráfico”. <http://www.fnpi.org/seguridadciudadana/?p=282>

44 Op. Cit.



“Las sociedades rurales del Tercer Mundo han encontrado la manera de adecuarse a los nuevos tiempos de la globalización integrándose al circuito del libre mercado con su incorporación a economías agrarias ilegales. Éste es el caso de no menos de 300 mil campesinos de los Andes sudamericanos que participan como proveedores de materia prima: coca (200 mil hectáreas), amapola (1,500 hectáreas) y marihuana (no menos de 1 mil hectáreas). Proveen los mercados regionales internacionales. Cada vez más, la hoya amazónica se verá confrontada con una progresiva y desordenada colonización incentivada por las economías ilícitas, lo que va a ocasionar, no sólo su rápida destrucción, sino el involucramiento progresivo de sus sociedades rurales ancestrales en esta vorágine asociada a la criminalidad”.

“En este nuevo escenario sociológico de la economía de las drogas —sigue Soberón— hay mayores áreas geográficas sin presencia del Estado ni de la modernidad, tanto en lo urbano (barrios marginales de todas las capitales y ciudades principales), como en lo rural, especialmente en áreas de frontera como es el Trapecio Amazónico por donde discurre el río Amazonas, desde las selvas del Putumayo o el Huallaga hasta Belem do Pará en las costas que miran a África Occidental.

Los grandes centros de desarrollo y modernidad urbanos del continente estarán rodeados de inmensas llanuras de pobreza, de ilegalidad y de violencia en las fronteras de la Hoya Amazónica, en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Lo mismo sucederá en las selvas tropicales del Pacífico colombiano y ecuatoriano. Se configuran así nuevos códigos donde se mezclan los principios liberales de mercado coexistiendo con reglas que ordenan y protegen las actividades ilegales, como ocurre entre las estructuras organizadas del Comando de la Capital o Comando Vermelho en Río de Janeiro, o en las bandas criminales emergentes de las comunas de Medellín: la Oficina de Envigado, Los Urabeños y Los Rastrojos”.

El reportaje de Jeremy McDermott⁴⁵ para InsightCrime señala justamente a estas dos últimas organizaciones criminales de Colombia como las

recién llegadas a Bolivia. Añade que en Santa Cruz ya existe una “Oficina de cobro” al viejo estilo de la Oficina de Envigado que en su momento creó Pablo Escobar.

El más reciente monitoreo de cultivos de coca realizado por ONUDC en Bolivia⁴⁶ señala que seis áreas protegidas en Bolivia se encuentran afectadas por cultivos de coca: el Isiboro Sécore (TIPNIS), Carrasco, Amboró, Apolobamba, Cotapata y el Madidid. Tres de estos parques se encuentran en la misma región que Ichilo. El reporte también señala que desde 2010 se detectaron cultivos de hoja de coca en esta provincia.

Sin embargo, esta región no es la única en la que se ha reportado que el narcotráfico internacional se instaló y logró relativo consenso de los pobladores locales. En octubre de 2013, el director de la FELCN, Mario Centellas, reportó la existencia de un “pueblo fantasma” en Oruro en el que sus pobladores se dedicaban a elaborar cocaína⁴⁷. Los pobladores de la localidad de Iruni, en el altiplano, convirtieron sus casas en centros de producción de clorhidrato. Las investigaciones establecieron que este “narcopueblo” era parte del circuito de envíos de droga que se realizan de manera regular a Chile. No se descartó que, desde ese país, la droga también fuera enviada hasta Europa del Este o Asia. Las actividades en Iruni se extendieron durante cuatro años, antes de que se produzca la intervención de la FELCN. Según los testimonios recogidos por la prensa en 2013, los habitantes de poblaciones aledañas denunciaron haber visto a muchos extranjeros en Iruni.

7. Políticas públicas del sur para el sur (a modo de conclusión)

Como ya se expuso más arriba, la normativa boliviana de 1988 no distingue entre los “peces gordos” del narcotráfico y los simples peones que ingresan en el negocio presionados fundamentalmente por sus graves problemas económicos y familiares y que

46 ONUDC. Estado Plurinacional de Bolivia: Monitoreo de cultivos de coca 2013. ONUDC. La Paz. 2014.

47 <http://www.correodelsur.com/2013/10/02/21.php>

45 Op. Cit.



sacan apenas migajas del negocio más lucrativo del mundo.

Otra de las dificultades es que, a pesar de los intentos de países como Uruguay con la despenalización de la Marihuana o de Bolivia con las expulsiones de la DEA y la NAS, todavía el modelo de la guerra contra las drogas “norte consumidor-sur productor/culpable” instalado por Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo pasado sigue vigente.

El consenso en torno a las convenciones de estupefacientes de 1961 y 1988 permanece vigente a pesar de acciones individuales como la de Bolivia al retirarse de manera temporal por la inclusión de la coca como sustancia controlada. En todos estos años hemos estado sometidos al análisis y a la información de una sola fuente o una sola metodología (ONU/Departamento de Estado de Estados Unidos), lo que no tiene relación o relevancia con la realidad multiforme de lo que ocurre en selvas, valles y las calles latinoamericanas.

La Bolivia de Evo Morales, por ejemplo, año tras año exhibe las cifras de la erradicación pactada de coca como su principal logro en materia de lucha contra el narcotráfico, al igual que la cantidad de toneladas de droga incautada. Sin embargo, no ha desarrollado indicadores propios que midan otros aspectos del fenómeno del narco relacionados a los derechos humanos, enfoque de género, enfoque ambiental, situación de indígena campesina, fenómenos migratorios, alternativas al desarrollo, prevención y tratamiento de adicciones, entre otros aspectos vitales e inherentes al tráfico de drogas. Por esta ausencia de indicadores específicos es que tampoco se han promovido o siquiera planteado políticas públicas nuevas o marcos normativos novedosos que se preocupen por las poblaciones vulnerables y la problemática ambiental.

Similar situación atraviesan otros países de América del Sur, donde el debate respecto a la regularización, despenalización o descriminalización del fenómeno de la droga ha comenzado con intensidad, sin embargo todavía no se ha materializado en políticas públicas comunes entre países.

Lamentablemente lo que se ha visto es que los países de la región replican las políticas cortoplacistas de represión y criminalización con y sin el apoyo de Estados Unidos. Un ejemplo es el acuerdo tripartito suscrito en 2012 entre La Paz, Brasilia y Washington, donde se promueve el uso de satélites para control de plantaciones de coca en Bolivia y permite “operaciones especiales” a la Policía del Brasil en la zona fronteriza. Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, hace las de proveedor de tecnología y equipamiento.

Un detalle no menor es que Brasil condicionó la puesta en vigencia del acuerdo a la ratificación congresal del “Convenio de asistencia recíproca para la represión del tráfico ilícito de drogas que producen dependencia”, un instrumento que se aprobó en 1988 pero que nunca fue ratificado por el Legislativo boliviano. 24 años después, finalmente, fue aprobado por senadores y diputados nacionales.

La intención de fondo que se advirtió por especialistas es que Brasil pretende tomar la posta que perdió Estados Unidos en cuando a influencia regional en materia de lucha antidroga⁴⁸. En otras palabras, se vislumbra una intención geopolítica brasileña de convertirse en el nuevo policía de la región. Esto motivado fundamentalmente por las grandes dificultades que atraviesa en el control del crimen organizado en su territorio, el masivo ingreso de cocaína y pasta base desde Bolivia y la creciente cantidad de adictos al clorhidrato, bazuco, crack y otros que se presenta en su sociedad.

Lamentablemente, esta clase de acciones y medidas permiten ver que el modelo prohibicionista todavía es la alternativa principal para el combate del narcotráfico en la mayoría de los gobiernos del subcontinente, incluyendo a Bolivia. A pesar de los esfuerzos realizados desde plataformas multilaterales como la Organización de Estados Americanos y su informe titulado “El problema de las drogas en América Latina”⁴⁹, las agendas políticas de los gobiernos no se han abierto a alternativas más allá de la represión y la criminalización.

48 <http://www.fmbolivia.tv/vigencia-de-acuerdo-tripartito-pasa-por-ratificar-un-protocolo/>

49 http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/drogas/elinforme/default_spa.asp



Las alternativas de regulación de mercados y de legalización están ahí, como modelos todavía en etapa de exploración⁵⁰ de manera aislada entre los países. Mientras los circuitos nuevos de la droga desde el sur hacia el sur son atendidos todavía desde el modelo prohibicionista que persigue a un piloto o a mochileros en la frontera entre Perú y Bolivia, pero que está muy lejos de frenar el fenómeno de los “narcovuelos” a dar con uno de los capos del negocio.

No basta, de ninguna forma, mantener el modelo represivo que celebra sólo incautaciones y detenciones masivas de “obreros” y alguno de los mandos medios en el negocio subcontinental de la droga. Todo lo planteado en el presente trabajo apunta a que, dada la nueva geopolítica de las drogas en América Latina, se precisa un enfoque de políticas públicas articulado entre los países sudamericanos y que atienda a los nuevos fenómenos sociales que el narcotráfico y sus economías perversas asociadas han generado. Es lo que llamamos desde el principio el enfoque sur-sur. No bastará la implementación de tecnologías nuevas y sistemas de intercambio de información cada vez más eficientes entre los Estados. Tampoco la articulación y coordinación inmediata de los cuerpos represivos. La realidad obliga a asumir la necesidad de concebir un sentido común compartido respecto a la problemática de las drogas y que sobre esa base cada país comience a abandonar los modelos y marcos normativos contraproducentes que fueron impuestos en el siglo pasado. En enfoque sur-sur no es más que un reconocimiento de los problemas actuales y la construcción de un nuevo consenso regional que debe ser aplicado de acuerdo a la realidad y soberanía de cada país. De otra manera la situación de las poblaciones más vulnerables como las de mujeres, niños, jóvenes, migrantes, indígenas y campesinos, junto a la crisis ambiental, estarán cada vez más condicionadas y susceptibles a las dinámicas del crimen organizado internacional.

50 Ver VARGAS MEZA, Ricardo. “Hacia un modelo de regulación de la oferta de drogas”. En: De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas. Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Bogotá 2013.

Queda terminantemente prohibido el uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich Ebert Stiftung (FES) sin previa autorización escrita de la misma.

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung

Pie de imprenta

Friedrich-Ebert-Stiftung Bolivia
Obrajes calle 14 | N° 5998
La Paz

Responsable

Philipp Kauppert, Director FES
Bolivia

Daniel Agramont, Coordinador
de Proyectos

Contacto

Tel: +591 2-2750005
Fax: + 591-2-2750090
www.fes-bolivia.org
Facebook: Fundación
Friedrich Ebert Bolivia
Twitter: @BoliviaFes